

CATALUÑA

Jané pedirá ampliar la plantilla de Mossos

A. L. CONGOSTRINA. **Barcelona**
El consejero de Interior, Jordi Jané, anunció ayer que no renunciará a ampliar la plantilla de Mossos d'Esquadra —que actualmente tiene cerca de 17.000 agentes— con nuevas promociones de agentes. Jané aseguró ayer, tras presidir el Gabinete de Coordinación Antiterrorista de la policía catalana, que de forma urgente solicitará al Gobierno catalán incrementar la dotación económica destinada a los Mossos d'Esquadra. El titular de Interior pretende así cubrir el cómputo de horas extraordinarias que están realizando los agentes para combatir la amenaza terrorista de carácter yihadista. Una cifra económica cuya cuantía no quiso especificar y que se extraerá de “una partida destinada a aspectos de urgencia”.

Jané informó ayer de que el mayor riesgo de sufrir atentados en el territorio catalán fue durante el último trimestre de 2015. “En septiembre de 2015 un 23% del patrullaje planificado de los Mossos d'Esquadra en Cataluña se dedicó a la lucha antiterrorista, en diciembre fue el 32% y sólo en Barcelona el 40%”, recordó. Jordi Jané admitió que en Navidad el peligro terrorista era evidente pero ahora “no existe una amenaza concreta, aunque debemos mantener la alerta y no bajar la guardia”.

El consejero de Interior anunció ayer que los Mossos potenciarán los servicios de inteligencia: “Recibimos mucha información que compartimos y analizamos, por ello vamos a dotar a la Comisaría de Información de más recursos y más activos”.

Bassa plantea derivar a los municipios la lucha contra la pobreza energética

CAMILO S. BAQUERO. **Barcelona**
El nuevo Gobierno de la Generalitat parece querer darle un vuelco a la manera como se afronta la lucha contra la pobreza energética. La consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Dolors Bassa, reveló ayer que

En la pasada legislatura, el Departamento de Empresa y Ocupación (con competencias en Consumo) fue el que llevó la batuta para diseñar la política contra la pobreza energética. En octubre pasado, la Generalitat había pagado los recibos a 13.200 familias y calculaba que podía duplicar las peticiones. Además, aún negociaba con las empresas suministradoras la cantidad de dinero que pondrían en un fondo común desde el cual se abonaría el coste de los impagos. Esa bolsa se anunció en octubre de 2014 y cuenta solo con el dinero aportado por la Generalitat.

Bassa también explicó, en una entrevista a *La Xarxa*, que seguirán las conversaciones con las compañías para evitar los cortes. No aclaró, sin embargo, si será su *megaconsejería* la que a partir de ahora lleva la voz cantante o si continuará siendo un tema que se lleve desde Empresa, donde está la mayor interlocución con las suministradoras.

Los servicios sociales de los municipios son ahora los responsables de elaborar los informes de vulnerabilidad social que hacen que una empresa suministradora no realice el corte. Algunos ayuntamientos si tienen programas con recursos propios para pagar las facturas, a lo que hay que sumar a entidades como Cáritas.

Poner la mirada en el mundo municipal es una manera, de acuerdo con Bassa, de evitar posibles vetos por parte del Gobierno central de una normativa propia, como ya pasó con el decreto de septiembre de 2014. Esta norma solo benefició a 900 familias y fue

una de las fórmulas para blindar las ayudas de cara a nuevas impugnaciones por parte del Gobierno central podría pasar por que fueran los ayuntamientos los que asumieran un papel más protagonista en el pago de los recibos a los que no pueden hacer frente

muchas familias a causa de la crisis económica. Para ello se tendría que destinar una dotación extraordinaria a los municipios para que pudieran hacer frente directamente a los diferentes casos, como ocurre ahora en Barcelona o L'Hospitalet de Llobregat.



Protesta en Barcelona contra la pobreza energética. / CARLES RIBAS

muy criticada pues solo postergaba el pago a después del periodo invernal. A pesar de su ineficiencia, Junts pel Sí sacralizó el recurso por parte del Gobierno central

como una gravísima afrenta. En octubre pasado, sucedió algo similar con una parte del Código de Consumo. Sin embargo, la ley que surgió de la ILP antidesahucios

sirve por lo pronto de cobijo al programa contra la pobreza energética que desarrolla Empresa, tal como lo explicaron en su día desde ese departamento. “No podemos desobedecer, pero no podemos priorizar una ley por encima de que la gente lo esté pasando mal”, aseguró Bassa cuando se le preguntó si sopesaba la desobediencia respecto al veto del Tribunal Constitucional.

“El mundo municipal tiene todas las herramientas para la detección y la atención a las personas afectadas, pero no tiene la fuerza en determinados momentos para lograr la implicación de las suministradoras”, advierte Oriol Illa, presidente de la Mesa del Tercer Sector. Desde la Alianza contra la Pobreza Energética creen que ahora es prioritario el qué en lugar del cómo. “Antes de decir que dará más dinero a los Ayuntamientos, el nuevo Gobierno debería comprometerse con una fecha para que esté firmado el convenio con las empresas para que estas contribuyan realmente en financiar el fondo contra la pobreza energética”, pide Maria Campuzano.

Bassa aseguró que la lucha contra la pobreza energética no está condicionada por la aprobación de los Presupuestos aunque abogó por la necesidad de tener los recursos para tirar adelante el plan de choque social pactado con la CUP. La Generalitat anunció ayer la ampliación de las ayudas urgentes para favorecer la permanencia de las familias en sus viviendas en caso de desahucios.

Comín quiere echar a las empresas privadas de la red de hospitales públicos

El titular de Salud avisa de que las prioridades se decidirán tras hablar con el sector sanitario

J. MOUZO. **Barcelona**
El nuevo consejero de Salud, Toni Comín, tomó el jueves el mando del Departamento con un tono conciliador, agradeciendo “la herencia recibida” de su predecesor, Boi Ruiz. Sin embargo, apenas 24 horas después del traspaso de carteras, ayer, las primeras palabras del titular de la sanidad pública evidenciaron un cambio de rumbo en el sector. “El modelo SISCAT (la red pública de hospitales) tiene que volver a su esencia. Sólo han de estar ahí operadores hospi-

talarios sin afán de lucro”, apuntó Comín.

Dentro del SISCAT (Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública) se encuentran los más de 60 centros que dan asistencia pública en Cataluña. Algunos de ellos son de titularidad pública (como los ocho del Instituto Catalán de la Salud), otros propiedad de entidades privadas sin ánimo de lucro u órdenes religiosas y otros —en concreto el Sagrat Cor, el General de Catalunya y la Clínica del Vallès—, están gestionados

por la empresa privada IDC Quiron Salud. Estos últimos son los que generan más suspicacias entre los defensores de la sanidad pública.

El consejero, que evitó profundizar en las prioridades del nuevo Gobierno catalán en materia de salud, sí reconoció su intención de “desprivatizar” el SISCAT. En declaraciones a los medios de comunicación antes de asumir el cargo, el flamante consejero de Salud también habló de reducir un 50% las listas de espera. “Las prioridades vendrán tras el diálogo con el sector. Lo que yo he explicado anteriormente es el marco programático, que ya es público, porque lo llevamos en el programa electoral de Junts pel Sí (JxSí) y en el acuerdo político con la CUP”, ha justificado Comín. El consejero participó en las negociaciones del plan de choque propuesto por JxSí a los anticapitalistas y reconoció ayer que medió especialmente en las propuestas vinculadas al ámbito sanitario.

El consejero sí quiso dejar claro, sin embargo, que las prioridades de su departamento se decidirán tras hablar con el sector sanitario y, una vez acordadas las líneas de acción, pedirá la comparecencia de la comisión de Salud del Parlament para explicar a los diputados sus propuestas.

“Enterrar” los recortes

Por su parte, las entidades del sector, sindicatos y colegios profesionales ya han comenzado a hacer sus peticiones al nuevo consejero. Unos y otros coincidieron en exigir un aumento de presupuesto. El sindicato Metges de Catalunya, mayoritario en el sector, pidió que “entierre” la época de recortes que ha sufrido la sanidad catalana en la última legislatura. CC OO solicitó también que se reabran quirófanos y plantas cerradas y “recuperar los derechos laborales perdidos desde 2010”.

Comín se ha convertido en el

primer consejero de Salud que no es médico. De hecho, no tiene ninguna formación en el ámbito sanitario —es filósofo, licenciado también en Ciencias Políticas y profesor en la escuela de negocios ESADE—. Pero, lejos de verlo como un handicap para el desempeño de su cargo, el consejero reivindicó ayer también su papel en el departamento. “El Gobierno necesita un político en Salud y el político necesita un equipo muy potente a su alrededor, gente prestigiosa en el sector”, defendió.

Aunque el consejero ha declinado revelar los nombres del equipo que lo acompañará en la legislatura, se baraja el nombre de David Elvira, miembro del consejo asesor de salud del expresidente Artur Mas, como director de Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Lo que sí ha trascendido oficialmente es el nombre del secretario general del departamento, que será Albert Serra, experto en gestión pública y alto cargo en ESADE.